



Con fecha 16 de mayo de 2023 tuvo entrada en el Portal de la Transparencia solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, formulada por [REDACTED], solicitud que quedó registrada con el número 001-079681, y cuyo contenido literal es el siguiente:

*“De mi mayor consideración,*

*Por medio de la presente, me dirijo a ud. a los fines de solicitarle la siguiente información pública:*

*1. El número de aportaciones recibidas, y si fuera posible el contenido de las aportaciones, en los siguientes procesos de Consulta Pública:*

- 2020: Transposición Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de supervisión y las medidas de conservación del capital.*
- 2020: Consulta pública para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales.*
- 2021: Consulta Pública al Mercado para la definición de actuaciones de impulso de la ciberseguridad a través de la Compra Pública Innovadora y la elaboración del Mapa de Demanda Temprana.*
- 2021: Consulta Pública a los efectos de elaborar un proyecto de norma legal o reglamentaria relativa al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.*
- 2022: Consulta Pública sobre la concesión directa de una subvención a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España para la gestión del programa “UNICO Demanda Bono de Conectividad para Pequeñas y Medianas Empresas”.*

*2. El número de aportaciones recibidas, y si fuera posible el contenido de las aportaciones, en los siguientes procesos de Audiencia e Información Pública:*

- 2020: Proyecto de Orden sobre los métodos de identificación no presencial para la expedición de certificados electrónicos cualificados.*
- 2020: Anteproyecto de Ley, por el que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores, el RD-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y el texto*



*refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el RD Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.*

- 2021: *Anteproyecto de ley sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación.*
- 2021: *Proyecto de Orden ETD/---/2021, de -- de ---, por la que se aprueba el CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS, en aplicación del artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.*
- 2022: *Anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de defensa del cliente financiero."*

El 25 de mayo de 2023 esta solicitud fue duplicada como **00001-00079941** y enviada a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial por ser el órgano competente para decidir sobre el acceso a la siguiente información:

1. *El número de aportaciones recibidas, y si fuera posible el contenido de las aportaciones, en los siguientes procesos de Consulta Pública:*
  - 2020: *Consulta pública para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales.*
2. *El número de aportaciones recibidas, y si fuera posible el contenido de las aportaciones, en los siguientes procesos de Audiencia e Información Pública:*
  - 2020: *Proyecto de Orden sobre los métodos de identificación no presencial para la expedición de certificados electrónicos cualificados.*

El 25 de mayo de 2023 empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para su resolución de la solicitud 00001-00079941.

En lo que se refiere al proceso de consulta pública que tuvo lugar del 17 de junio 2020 al 24 de julio 2020 para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales, se indica que no se trata del trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, del Gobierno, previsto para normas reglamentarias y legales, sino de una consulta ciudadana que contribuyese a las deliberaciones del grupo de expertos y enmarcada en el proceso participativo de elaboración de la versión preliminar de la Carta de Derechos. No obstante, se admite el acceso a las aportaciones recibidas, una vez anonimizadas. Las 204 respuestas recibidas están disponibles en formatos pdf y Word, anonimizadas, en un único fichero zip de tamaño 68Mb que puede descargarse desde la propia página de la consulta en el siguiente enlace:



[https://portal.mineco.gob.es/es-es-ministerio/participacionpublica/audienciapublica/Paginas/SEDIA\\_Carta\\_Derechos\\_Digitales.aspx](https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/audienciapublica/Paginas/SEDIA_Carta_Derechos_Digitales.aspx)

En lo que se respecta al Proyecto de Orden sobre los métodos de identificación no presencial para la expedición de certificados electrónicos cualificados, esta Secretaría de Estado resuelve **denegar el acceso** a la información requerida por [REDACTED], todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 14.1.k) de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, según el cual el derecho de acceso podrá ser limitado cuando el acceso a la información pueda perjudicar la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión.

En concreto, el acceso a la documentación del trámite de audiencia puede perjudicar la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión de los interesados que presentaron alegaciones sin tener conocimiento de que las mismas podían hacerse públicas, y que, por lo tanto, podrían ver perjudicados sus intereses de llevarse a cabo la publicación de dichas alegaciones. Por ello, en virtud de lo establecido en el apartado k) de este artículo 14.1., se considera procedente no aportar la documentación relativa a este trámite.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Firmado electrónicamente:

La Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial